Reincidencia Delictiva de adolescentes en Cundinamarca: Políticas y programas de Intervención para la Inclusión y Protección Social.

Sandra Yasmine Ortiz Yepes

Director

Dr. César Giraldo

Universidad Santo Tomas

Maestría Protección Social

Bogotá. D.C. Colombia

Noviembre de 2014

Reincidencia Delictiva de adolescentes en Cundinamarca: Políticas y programas de Intervención para la Inclusión y Protección Social.

Monografía requisito para optar al título de Magister en Protección Social

Sandra Yasmine Ortiz Yepes

Director

Dr. César Giraldo

Universidad Santo Tomas

Maestría Protección Social

Bogotá. D.C. Colombia

Noviembre, de 2014

Nota de aceptación

Firma del presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Bogotá D.C. ____ ____ ____

AGRADECIMIENTOS

¡Agradezco al artífice de éste logro. Dios!

Infinitas gracias a mi madre, esposo e hija por su amor y apoyo incondicional, que sin su ayuda no hubiese sido posible lograrlo.

Agradezco al Doctor Cesar Giraldo por su apoyo y orientación constante en éste proceso académico.

Agradezco a la Universidad Santo Tomas, a los docentes de la Maestría Protección Social, por abrir sus puertas y compartir sus conocimientos, tan valiosos.

Gracias a mis familiares y amigos quienes estuvieron presentes constantemente, y que con sus palabras y actos de apoyo contribuyeron para llegar a la meta.

Sandra Yasmine Ortiz Yepes

Tabla de Contenido

RESUMEN.....	6
INTRODUCCIÓN.....	8
CAPITULO I: conceptualización.....	10
1.1. Definición de Reincidencia delictiva.....	10
1.2. El modelo integrado de la Conducta delictiva (modelo Andrews y Bonta). Factores Protectores y Factores de riesgo precipitantes de la reincidencia en Adolescentes.....	15
1.3 Participación delictiva de adolescentes: un enfoque desde la Exclusión social.....	21
 CAPITULO II: Análisis de la Reincidencia Delincuencial de adolescentes en Cundinamarca.....	 29
2.1. Hallazgos de la Investigación: Características delictivas de los adolescentes (modalidad del delito, delitos frecuentes. Periodo (2011, 2012,2013).....	29
2.2. Respuestas y fallas del Sistema Responsabilidad Penal para atender la reincidencia de adolescente en Colombia.....	35
2.3. Políticas de Intervención, Justicia Restaurativa.....	41
 DISCUSION.....	 48
CONCLUSION.....	51
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	53

Resumen

El aumento de la participación de adolescentes en actividades delictivas, representa uno de los presupuestos para la implementación *del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes* (SRPA), el cual tiene un enfoque diferenciado en tanto busca proteger y reducir los delitos cometidos por adolescentes entre los 14 a 18 años de edad, pero la situación actual, es crítica, en el entendido que no solo hay un aumento en los delitos cometidos por esta población, sino un escenario emergente conocido como reincidencia, que consiste en que adolescentes que han incurrido en delitos y han sido objeto de medidas de protección en un mismo año registran más de un hecho delictivo. Frente a las deficiencias que presenta el panorama jurídico penal, resulta plausible ver que en Europa, la noción de la acción jurídico penal, no es una garantía para reducir la manifestación de criminalidad provocada por adolescentes, por ello han acudido a reorientar la intervención o acción del Estado bajo la relación de inclusión y exclusión social que permita asociar riesgos y amenazas en reducir las posibilidad de ocurrencia de delitos de manera reiterativa.

Para realizar una lectura diferenciada al fenómeno de la reincidencia delictiva de adolescentes, es menester colocar un marco teórico que permita explicar la ocurrencia o la capacidad de previsibilidad de la conducta delictiva por adolescentes, en un contexto diferente al marco jurídico penal, pues se tendrá en cuenta que los factores protectores como (familia y Estado) están presentando falencias en preservar a los adolescentes en contextos saludables; basándonos en el modelo de la conducta de Andrews y Bonta. Luego colocaremos en discusión el fenómeno en un nivel regional o local, es decir, se revisará el comportamiento de la reincidencia en Cundinamarca, los municipios y factores de mayor criticidad. Evidencia que facilitará la discusión y la necesidad de pensar en respuestas oportunas del Estado, para que se generen políticas y programas que no se han creado integralmente ya que el SRPA presenta fallas en su implementación y las respuestas no son contundentes en contrarrestar la reincidencia y prevenir la delincuencia en los adolescentes de Cundinamarca.

Palabras Clave: Adolescentes, Reincidencia, familia, Protección Social, Inclusión, Programas, SRPA, factores Protectores.

Introducción:

El presente trabajo surge en el contexto del incremento de la delincuencia de adolescentes, el cual no ha tenido la eficaz acción gubernamental, a pesar de ocupar cierta ponderación en la agenda estatal.

El problema del escrito consiste en determinar si las condiciones socio familiares del adolescente infractor, tienen relación con una eventual reincidencia.

Para desarrollar el presente escrito, se tendrán en cuenta varios aspectos que nos adentraran y permitirán entender la reincidencia de las conductas delictivas en adolescentes. Se requiere inicialmente definir el concepto de reincidencia, en segundo lugar, se hará énfasis en la relación de las conductas reincidentes y los factores protectores como Familia, Sociedad y Estado, para conocer sus fortalezas y debilidades.

Por otro lado, tendremos en cuenta la información propiciada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Policía Nacional acerca de la Reincidencia Juvenil, sus acciones delictivas más frecuentes, Municipios y factores precipitantes de éstas conductas, para realizar análisis y comparaciones a través de “Tablas” y medir la magnitud del problema, basados en la realidad actual de las conductas delictivas de los adolescentes de Cundinamarca.

En el presente escrito no se pretende explorar las deficiencias del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, sino que se pretende enfatizar en aspectos socio familiares, como principal prevención de las conductas delictivas de los adolescentes.

Pero sí mencionaremos las falencias, en la puesta en marcha del sistema, para prevenir las conductas delictivas y su relación con el incremento de la crisis social de los adolescentes, ya que el SRPA (Sistema Responsabilidad Penal para Adolescentes) presenta fallas en su aplicación y deja ver un SRPA endeble, que no ha cumplido sus objetivos como son prácticas de carácter pedagógicas, para alcanzar la Justicia Restaurativa.

Mencionaremos a su vez la importancia de las políticas y/o programas socioeducativas y su implementación responsable por parte del Estado, para prevenir los riesgos multifactoriales que generan la reincidencia juvenil, pero aún más importante, para prevenir

la delincuencia en niños y adolescentes desde el núcleo familiar. Sólo proporcionando unos recursos con los mayores índices de calidad y eficacia puede desarrollar y alcanzar los objetivos básicos en aras de proporcionar al ciudadano las mejores respuestas para la solución de sus problemas. Uno de ellos, la disminución del delito a través del tratamiento más adecuado de los menores infractores, se convierte prioritario en la sociedad actual.

CAPITULO I

Título 1. Conceptualización

1.1 Definición de la Reincidencia delictiva

El incremento y frecuencia de conductas delictivas de los adolescentes en Cundinamarca, permite relacionar o incorporar el fenómeno de la reincidencia, la cual no tiene una definición jurídica expresa en la Ley 1098 de 2006, en tanto que el artículo 159¹ dispuso que las sentencias proferidas en procesos por responsabilidad penal para adolescentes no tendrán el carácter de antecedente judicial, y en efecto se simplificó a utilizar sistemas de información para llevar el registro de los adolescentes que han cometido delitos.

La reincidencia delictiva en adolescentes, ontológicamente debería tener un marco de comprensión en el ámbito del Derecho, como quiera que estamos hablando de la relación (comisión de un hecho contenido en un código penal, determinado como delito, un infractor que tiene la calidad de adolescente entre los 14 a 18 años no cumplidos, y un tercer elemento sería la reiteración de la infracción al orden jurídico penal por parte del adolescente en determinado tiempo que no supera la mayoría de edad). Sin embargo, se tratará en el presente escrito, colocar elementos de contenido social, psicológico, y sociológico, en torno a la acción estatal, es decir, señalar todo un entramado social para aproximarnos a explicar el funcionamiento, mantenimiento, y la acción estatal con mayor eficacia en atacar la reincidencia no solo desde el espectro jurídico penal, sino desde un enfoque diferenciado que renueve el esquema tradicional, en dirigir la acción gubernamental a los factores o riesgos que provocan o inciden en la reincidencia delictiva en adolescentes.

¹Artículo 159. Prohibición de antecedentes. Las sentencias proferidas en procesos por responsabilidad penal para adolescentes no tendrán el carácter de antecedente judicial. Estos registros son reservados y podrán ser utilizados por las autoridades judiciales competentes para definir las medidas aplicables cuando se trate de establecer la naturaleza y gravedad de las conductas y la proporcionalidad e idoneidad de la medida. Las entidades competentes deberán hacer compatibles los sistemas de información para llevar el registro de los adolescentes que han cometido delitos, con el objeto de definir los lineamientos de la política criminal para adolescentes y jóvenes.

La reincidencia, en el diccionario de real academia española, se encuentra definida como: *ii. f. Reiteración de una misma culpa o defecto, ii. f. Der. Circunstancia agravante de la responsabilidad criminal, que consiste en haber sido el reo condenado antes por un delito análogo al que se le imputa.* La Ley 1.098 de 2006, considera a adolescentes a las personas entre 12 y no cumplido los 18 años de edad, y en tanto a los delitos cometidos por adolescentes, son aquellos que se encuentran definidos en el Código penal colombiano.

Algunos autores han definido la reincidencia delictiva en un estricto sentido jurídico. Por ejemplo, Cofre (2011), consideró que la reincidencia corresponde a uno de los elementos intervinientes en el proceso de determinación de la pena, en el momento de condenar a un sujeto particular por su responsabilidad en la comisión de un delito. De manera específica, en este contexto la identificación de la condición de reincidencia, a partir del análisis de los antecedentes penales del imputado, es comprendida como una causal de agravación de la responsabilidad penal (p. 8).

En España, la Agencia para Reeducción y reinserción del menor infractor, en el marco del estudio denominado *Reincidencia delictiva en menores infractores de la comunidad de Madrid (España)*, consideró que:

Un sujeto es reincidente si tiene dos o más medidas judiciales en la condición de cautelar o firme. Además, estas dos medidas tienen que cumplir las siguientes condiciones: (1) una de ellas ser firme y (2) si es cautelar sólo se ha considerado a aquellos sujetos que tenían la medida de libertad vigilada. Esto significa que, en un sentido estricto, no hemos valorado la reincidencia, entendida como la comisión de otro delito susceptible de nueva medida en otro momento temporal, sino que más bien hemos considerado, de forma retrospectiva, que el sujeto había cometido al menos dos delitos, razón por la cual en el momento de evaluarla disponía de dos o más medidas. (2008, p.43).

Frente a tales aproximaciones conceptuales podemos indicar que la reincidencia no solamente debe ser entendida como la comisión de dos o más delitos en que incurre el adolescente en momentos diferentes, sino también corresponde al fracaso de las medidas ejecutadas al adolescente infractor, deficiencias en la acción gubernamental para evitar la reiteración delictiva por parte de las personas entre los 14 y 18 años no cumplidos.

Es decir, cuando se presentan acciones reincidentes, emerge la falta de eficacia y capacidad del Estado para predecir y atacar las variables o riesgos en la órbita delictiva que

inciden de manera decisiva en que un adolescente aprehendido o que haya sido objeto de sanciones como consecuencia de una conducta delictiva, repita su comportamiento reprochable y contrario a Derecho.

Pero más aún se evidencia la falta de eficacia de las acciones del Estado para generar mecanismos de protección, en su entorno familiar y social, que es donde se vulneran más sus derechos.

porque es allí donde se generan las más graves condiciones de vulnerabilidad social, tales como maltrato y violencia en el hogar, carencias o falta de oportunidades para ejercer sus derechos la alimentación, salud, vivienda, educación, recreación; violencia en su entorno y comunidad, consumo y adicción a drogas psicoactivas, fácil acceso al uso de armas. Revista infancia Juventud y Ley 2014 (p.14)

Cabe aclarar que las carencias y pobreza no siempre son significado de delincuencia, pero existen factores que determinan las conductas delictivas y se señala a la inequidad y exclusión social como precipitantes de ésta anomalía. Es por esta razón que en la protección integral de las familias, se cimienta no solo un presente y futuro para sus integrantes especialmente los niños, niñas y adolescentes, sino que se tejen redes sociales sólidas a largo plazo, generando en sus individuos estabilidad emocional, previniendo fracturas en la interacción y convivencia ciudadana.

Se hace énfasis en que las conductas delictivas en adolescentes tiene un trasfondo, que no ha sido detectado y atacado por las entidades estatales, el cual se debe observar y analizar con detenimiento para generar acciones contundentes y prevenir la delincuencia, y la reincidencia delictiva que no solo hace daño al joven, que continúa en sus acciones punibles sin ser reintegrado, sino que pierde la sociedad porque además se pierde el aporte que éste le puede generar.

Un momento previo a la reincidencia en adolescentes, tiene presupuesto inicial que éste haya sido objeto de las siguientes medidas como consecuencia de su calidad de autor en un delito, contenido en la Ley 599 de 2000 “Código penal”. Así:

SANCION	DESCRIPCIÓN
LA AMONESTACIÓN	Es la recriminación que la autoridad judicial le hace al adolescente sobre las consecuencias del hecho delictivo y la exigencia de la reparación del daño. En todos los casos deberá asistir a un curso educativo sobre respeto a los derechos humanos y convivencia ciudadana que estará a cargo del Instituto de Estudios del Ministerio Público.
LAS REGLAS DE CONDUCTA	Es la imposición por la autoridad judicial al adolescente de obligaciones o prohibiciones para regular su modo de vida, así como promover y asegurar su formación. Esta sanción no podrá exceder los dos (2) años.
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES A LA COMUNIDAD:	Es la realización de tareas de interés general que el adolescente debe realizar, en forma gratuita, por un período que no exceda de 6 meses, durante una jornada máxima de ocho horas semanales preferentemente los fines de semana y festivos o en días hábiles pero sin afectar su jornada escolar.
LA LIBERTAD VIGILADA	Es la concesión de la libertad que da la autoridad judicial al adolescente con la condición obligatoria de someterse a la supervisión, la asistencia y la orientación de un programa de atención especializada. Esta medida no podrá durar más

	de dos años.
MEDIO SEMI-CERRADO.	Es la vinculación del adolescente a un programa de atención especializado al cual deberán asistir obligatoriamente durante horario no escolar o en los fines de semana. No podrá exceder los tres años esta sanción.
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD.	<p>La privación de la libertad en centro de atención especializada se aplicará a los adolescentes mayores de dieciséis (16) y menores de dieciocho (18) años que sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de (6) años de prisión. En estos casos, la privación de libertad en centro de atención especializada tendrá una duración de uno (1) hasta cinco (5) años.</p> <p>La privación de libertad para adolescentes mayores de catorce (14) y menores de dieciocho (18) años, solo procede para aquellos que sean hallados responsables de homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual, lo que significa que otros delitos tales como tráfico, fabricación de estupefacientes solo proceden medidas pedagógicas.</p>

Los factores protectores como familia, sociedad y Estado deben garantizar al ser humano estabilidad, proporcionando desde sus inicios bienestar integral para que crezcan en ambientes saludables. Es Estado y la sociedad deben prestar especial atención a la

familia y sus necesidades ya que es la encargada de la integración y socialización primaria del niño.

1.2 El modelo integrado de la conducta delictiva de Andrews y Bonta.

La Familia, Sociedad y Estado como garantes de derecho de los niños, niñas y adolescentes deben establecer parámetros y blindar a esta población de las diferentes problemáticas que ofrece el entorno, carencias, abusos, violencia, explotación, pobreza, exclusión, desplazamiento, son algunas de las adversidades que experimentan los niños, niñas y adolescentes, fracturando una personalidad que debería ser estructurada con bases sólidas, en principios, valores, estabilidad emocional y satisfaciendo las necesidades básicas para establecer vínculos sólidos con su núcleo familiar y la Sociedad.

La reincidencia delictiva de adolescentes no tiene una exclusiva explicación desde el sistema de responsabilidad penal para esta población, de tal suerte que se requiere adentrarse en factores y riesgos del contexto, tales como Familiares, ambientales y sociales. Para lograr una mayor comprensión, el modelo integrado de la conducta delictiva de Andrews y Bonta es el marco teórico de mayor incorporación o acomodamiento para explicar el fenómeno de la reincidencia delictiva de adolescentes.

Como premisa a la teoría de estos autores, podemos señalar que, la persona no puede ser considerada como algo aislado, vive, crece y se desarrolla dentro de un contexto interactivo

y dinámico; de ahí que la escuela, la familia, el grupo de pares y la comunidad deban tenerse en cuenta como unidades que conforman el proceso de socialización².

FUENTE: Reincidencia Delictiva en Menores Infractores de la Comunidad de Madrid: Evaluación, Características Delictivas y Modelos de Predicción. España (2008)

¹ Estudio de reincidencia Madrid

Andrews y Bonta En el Modelo Integrado de la conducta Delictiva plantean que la persona, su ambiente y su conducta interaccionan en un proceso de influencia recíproca, por ello los factores situacionales (ambientales y sociales) deben ser considerados si se quiere mejorar la habilidad para predecir conductas. Esta última consideración, representa una de las principales innovaciones frente al modelo típico individual de causalidad e intervención para prevenir la delincuencia.

Es así que las conductas de adolescentes están marcadas por los factores situacionales, y se puede afirmar que de acuerdo al ambiente en que se encuentren así mismo reaccionan ante los estímulos como un mecanismo de defensa para contrarrestar y no sentir el “peso” de lo que vive en su entorno, y es en éste momento de transición (de la adolescencia a la adultez) que se encuentran con periodos críticos de formación de identidad y experimentan constantes cambios físicos y cognitivos lo que los hace más influenciables.

Este modelo ilustra integralmente nuestro tema de investigación porque las causas de la Reincidencia Delictiva se pueden observar desde amplias perspectivas.

Es un modelo que intenta explicar las diferencias individuales en la conducta delictiva atendiendo a las influencias o refuerzos del más amplio contexto cultural y social, del comunitario y familiar más próximo, de las relaciones interpersonales (procesos y contenidos de las interacciones) y de las variables personales (biológicas, cognitivas, conductuales, educativas...). Además considera factores que activamente alientan o desalientan la actividad antisocial e incorpora elementos tanto motivacionales como de

control.) Además tienen en cuenta el abordaje de las características propias del núcleo familiar. (p.18).

La familia, es uno de los factores protectores, que se supone debe proporcionar al individuo bienestar, pero hay varios tipos de ellas, algunas frágiles en sus pautas, otras pasadas de estrictas que solo se limitan a las órdenes, familias disfuncionales, hoy día no se cree tan importante que los niños crezcan en familias mono parentales siempre y cuando se oriente asertivamente y haya acompañamiento necesario en las situaciones de su vida, pues de nada sirve que se encuentren las dos figuras (materna-paterna) en la familia cuando no son referentes y modelos positivos para sus hijos porque puede estar destruido éste núcleo en su interior. No es la estructura familiar la que debe ser cuestionada, sino la calidad de la socialización y educación familiar.

En concordancia con las explicaciones psicológicas enfatizan que la delincuencia ocurre cuando el proceso normal de aprendizaje social basado en las recompensas y castigos de los padres, se ve alterado por una disciplina errática, una pobre supervisión, hostilidad entre los padres, y modelos paternos antisociales y criminales. Si no se crean fuertes relaciones entre las personas implicadas en las situaciones de interacción, los castigos y recompensas mediadas interpersonalmente tendrán poca influencia.

Los modelos que aquí se habla fue empleado por el psicólogo Albert Bandura quien plantea la teoría del Aprendizaje Social, y afirma que la conducta se adquiere por modelamiento u observación, pero más adelante amplía sus conceptos y “cree que la conducta humana debe ser descrita en términos de la interacción recíproca entre determinantes cognoscitivos, conductuales y ambientales”.

Entonces según lo propuesto por Bandura, niños, niñas, y adolescentes adquieren las conductas no solo por modelamiento u observación sino por la interacción con su entorno, la familia, sociedad, pares o iguales que tienen gran relevancia en la conducta del individuo y es este entorno que precipita (en la mayoría de los casos) las conductas antisociales cuando en la cotidianidad, se experimentan: carencias, agresiones, Pautas de Crianza inadecuadas, abusos, pobreza, inequidad y abandono que seguramente replicarán en su ámbito.

Otros aspectos que ocurren y que pueden ser precipitantes en la conducta delictiva y las fracturas en la familia son la ruptura del vínculo conyugal y/o la separación temprana, han sido factores ampliamente aceptados en la desviación conductual del menor, sobre todo si van acompañados de un ambiente de miseria económica, moral y social.

Pero no son éstos los únicos factores, que precipitan los riesgos en adolescentes para involucrarse en las conductas antisociales, en el modelo se reconocen otros factores de riesgo:

Muchos son los caminos para involucrarse en la carrera delictiva, pero las actitudes y relaciones antisociales son factores de riesgo especialmente importantes. Por un lado, las actitudes, valores y creencias -procriminales o anticriminales- son las que determinan la dirección que adoptará el control personal y representan la fuente de racionalizaciones y auto-exculpaciones más relevante que la persona tiene disponible en cualquier situación. (p.17)

Así mismo se reconocen otros factores que a nuestro modo de ver son pre disponente y precipitante de los riesgos que vinculan a un joven con conductas antisociales, y que son tan importantes como lo sería el acompañamiento familiar.

Cuando se cuenta con medios protectores en la familia y sociedad, nuestros sentimientos, pensamientos y acciones se estructuran positivamente, en el modelo resalta que el estado psicológico del individuo es trascendental para ser o no vulnerable ante las conductas diferentes conductas.

El equipamiento psicológico del carácter del individuo le hace particularmente vulnerable a presentar diferentes tipos de desviación, que se podrían agrupar en cuatro grandes modalidades de conductas antisociales: la violencia interpersonal (agresiones físicas, vandalismo, incendios), los delitos contra la propiedad, el desafío a la autoridad (acoso y rebeldía en la escuela, en el empleo y en el hogar) y conductas de riesgo elevado (conducción temeraria, abuso de drogas y alcohol, prostitución) (p.24)

Todos estos factores de riesgo tienden a coincidir y a estar interrelacionados, creando en el niño, niña y adolescente una problemática más estructurada.

La persona su ambiente y su conducta interaccionan en un proceso de influencia reciproca la concurrencia de estos factores hace difícil establecer su independencia, así como las influencias interactivas secuenciales que se dan en la delincuencia y la conducta antisocial. Por eso parece razonable que una explicación que incluya un amplio rango de variables,

tanto propiamente psicológicas como sociológicas, sea más adecuada que aquella que se centre exclusivamente en una de estas influencias. (p.15)

En nuestro medio social encontramos diferentes factores que predisponen las conductas antisociales; hurtos, consumo y expendio de SPA, daño en bien ajeno, son solo unas de esas conductas en nuestros adolescentes que se incrementan cada día (como lo veremos adelante).

Este estudio nos orienta acerca del tema en cuestión ya que plantea que: un joven infractor que tiene muchas necesidades criminógenas (*factores de riesgo que lo vinculan con un estilo de vida antisocial*) es, al mismo tiempo, alguien capaz de reincidir con una elevada probabilidad. La evaluación de los jóvenes delincuentes no puede estar separada de la tarea de determinar, por una parte, el nivel de riesgo que presentan para la continuación de la carrera delictiva y, por otra parte, de señalar cuáles han de ser las necesidades que han de formularse como objetivos para el tratamiento dentro del sistema de justicia juvenil. Esta es una de las exigencias de lo que hemos denominado el modelo criminológico o intervencionista de la delincuencia juvenil, en contraposición al viejo modelo asistencialista, que tenía como una de sus características la formulación de diagnósticos estáticos, desvinculados de la posible intervención reeducadora que pudiera llevarse a cabo. (p. 24).

Es así como se plantea no pueden estar separados las evaluaciones y estudios constantes que detecten en los adolescentes, los factores precipitantes de conductas antisociales y prever las posibles soluciones con políticas públicas y sociales serias para contrarrestarlas para prevenir la reincidencia de los delitos en esta población. Los aportes acerca de la reincidencia en Europa, parecen trascendentales para visualizar las características de la población objeto:

Desde la creación de la “Agencia para la Reeducción y Reinserción del Menor Infractor” en España, el cual “marcó como prioridad la mejora en el tratamiento de los menores a su cargo con el objetivo de prevenir la comisión de nuevos delitos, aspecto éste de importancia fundamental dado que tanto la gravedad de los actos cometidos como su cantidad y frecuencia se relacionan en gran medida con la reincidencia. También recuerdan que el 50 % de los delitos son cometidos tan solo por el 15% del total de menores infractores y que la mayor parte de la comisión de delitos graves y muy graves, las llevan a cabo menores multirreincidentes. (p.3)

Estos datos son preocupantes para la comunidad no solo colombiana sino internacional, porque vemos que la reincidencia es un problema que se ha venido consolidando en los adolescentes y jóvenes.

Según el estudio Reincidencia Delictiva de Madrid – España; las conductas delictivas y Reincidentes son generadas por:

Aspectos multifactoriales y otro factor relacionado que ha sido muy notable en los últimos años es la familia, de la cual ya hablamos pero ésta vez se hará énfasis como institución social, y su visión actual cómoda y acomodada por los cambios globales, culturales, tecnológicos, que permite encontrar un amplio interés y preocupación de la familia en la economía de la que se hacen dos lecturas: la primera, cuantificar la masa patrimonial de las familias, es decir, acumular cosas materiales, los padres dan prioridad a la obtención de recursos materiales, cumplir con obligaciones financieras y gravamen al Estado y acumular capital, no es que todo esto sea negativo, sino que requiere una relación armónica con el sistema familiar.

La segunda lectura converge en aquellas familias que han pactado una lucha constante en satisfacer sus necesidades básicas insatisfechas por circunstancias económicas y sociales como familias desplazadas, destechadas o afectadas por fenómenos naturales y el conflicto armado, que han buscado alternativas económicas informales para lograr el objetivo de mejorar la calidad de vida, en términos materiales. Creando una fractura de comunicación entre padres e hijos y demás integrantes de la familia, y para el caso particular los hijos no reciben de sus padres un acompañamiento y orientación permanente que prevengan conductas delictivas, derivado de esto se presentan otras conductas en los adolescentes como Deserción Escolar, falta de aprovechamiento del tiempo libre, pandillismo, consumo de Sustancias Psicoactivas.

Tal como lo firma el *Informe de Vigilancia Superior al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Procuraduría Gral. Nación) (2011)*.

En cuanto a la familia se resalta que mayoritariamente las y los adolescentes en conflicto con la Ley Penal provienen de familia monoparentales, reconfiguradas, con conductas disfuncionales, que provienen de contextos marginales y de pobreza, en una situación de permanente inestabilidad laboral, con antecedentes de violencia y desplazamiento, abuso sexual y maltrato, entre otros. (p.144)

Claramente observamos que los factores que hemos venido mencionando; de acuerdo a lo planteado por Andrew y Bonta, no solo son importantes en la prevención de la delincuencia juvenil sino que hacen parte de la estabilidad, e integralidad que conducen al bienestar físico y mental en el transcurso de la vida de los seres humanos, lo que constituye un mecanismo de defensa y prevención de factores de riesgo del entorno; pues son la

Familia, Sociedad y Estado quienes deben procurar un desarrollo armonioso donde se respete su personalidad y cultiven valores, asimismo se deben prevenir las necesidades criminógenas con las prácticas socioeducativas que involucren a estas redes sociales, además de resarcir el daño que el infractor ha causado. El texto elaborado por el ministerio público dejó de presente lo siguiente:

En este orden de ideas, la intervención al adolescente considera el componente de protección para aquellos jóvenes que han tenido experiencias de vulneración de derechos y condiciones de exclusión social, pero también, la reparación del daño causado en la medida que asume al adolescente como un agente activo dentro del proceso. (p.145)

Además del resarcimiento del daño a través de las prácticas socioeducativas en adolescentes que profundizaremos adelante, la intervención para prevenirla delincuencia, debe ser desde que el niño nace y crece en su núcleo familiar, pues los factores protectores como familia y Estado son trascendentales en proporcionar a los individuos los elementos de bienestar, para que no haya desvinculación del individuo con la sociedad, por falta de garantías de estas redes. Por eso nos parece importante hacer énfasis en este punto del escrito del tema de Exclusión Social, en el cual observaremos problemáticas no menos trascendentales asociadas con la fractura de las redes sociales.

1.3. Participación delictiva de adolescentes: Un enfoque desde la Exclusión Social.

La participación de adolescentes reiterativamente en conductas delictivas tiene una aparente explicación en el contexto penal, pero existen factores, riesgos que advierten situaciones complejas que no tienen respuesta efectiva desde el *Sistema Responsabilidad Penal para Adolescentes* (SRPA) que requiere un enfoque diferenciado, atención integral; es decir, una mirada distinta con mayor capacidad de previsibilidad en infracciones penales por los adolescentes. Para ello mencionaremos elementos que permitirán identificar y priorizar la acción gubernamental frente al fenómeno. *La salud* ocupa un privilegiado espacio en esta discusión.

En el marco del *Informe de la Comisión de evaluación al SRPA, (2011)*, las distintas autoridades que participan en el sistema, consideraron elementos no relacionados en el ámbito judicial:

Manifiestan que los adolescentes hombres y mujeres involucrados en la comisión de delitos en el país presentan en muchos casos problemas de salud asociados con discapacidades, con desnutrición, lesiones corporales, enfermedades mentales y adicciones que afectan sus facultades físicas y mentales. Ante la ausencia sistemática de programas liderados por el ente responsable de este derecho como el Ministerio de Salud, las respectivas secretarías municipales y por lo tanto de las EPS, el problema es asumido en algunos casos por el Instituto de Bienestar Familiar, entidad no experta en salud. Los análisis realizados por reconocidas organizaciones sociales que atienden adolescentes ofensores han prendido las alertas frente a la relación directa que existe entre el consumo de sustancias psicoactivas y en la comisión de delitos por parte de adolescentes, además de la preocupante situación de la salud mental de los mismos. (p.15)

Bajo la proposición presente en el estudio, se puede afirmar la dificultad de protección para los adolescentes infractores en aspectos fundamentales de la protección social como la salud, en tanto que se evidenció que los adolescentes presentan vulnerabilidad, riesgos. Por ejemplo la desnutrición, las enfermedades mentales, adicción al consumo de sustancias psicoactivas, constituye condiciones de vulnerabilidad y aumenta la posibilidad de la comisión de delitos por parte de los jóvenes. Este último permite inferir que hay deficiencia en la garantía de los derechos fundamentales para los adolescentes, en tanto que los programas no son suficientes ni sólidos para impactar esta población.

Según el informe de la comisión de evaluación al SRPA, cuando el adolescente infractor es aprehendido por la Policía Nacional, la acción del Estado está orientada a ser eficaz a través de un proceso penal; el problema de salud no es atendido integralmente a pesar que la Constitución y el artículo 60 de la Ley 1098 hacen énfasis en acciones y programas especializados que garanticen bienestar para el adolescente.

Por lo que se observa que los adolescentes, sufren carencias de muchas formas; evidenciando la exclusión social. Cuando hay exclusión social entendida; como el quiebre o desvinculación del individuo o grupos con la sociedad, en los diferentes ámbitos; existe evidente fractura en los derechos humano, a su vez se infiere que hay relación con los

factores precipitantes que involucran y estabilizan las conductas delictivas y violentas en los adolescentes:

Rodríguez, (2007) los jóvenes Latinoamericanos en su calidad de víctimas o victimarios se ven envueltos en complejos cuadros de violencias, motivados por agudos cuadros de exclusión social. La problemática de los jóvenes cada vez es más aguda y amplia enfrentando en América Latina y el Caribe –desde hace décadas- un agudo cuadro de exclusión económica, social, política y cultural, que los mantiene alejados de la dinámica central de nuestras sociedades y los obliga a refugiarse –en muchos casos- en los márgenes de nuestras ciudades y pueblos. (p.539).

La exclusión aparejada con desprotección social genera pobreza. La Comisión Económica Para América Latina, en el documento *Panorama Social* (2013), presenta cifras en América Latina de la situación de escasez y pobreza de niños, niñas y adolescentes, reflejando la gravedad de la situación para este grupo etario en cuanto a la Exclusión Social:

En torno a 2011, en 17 países de América Latina, el 40,5% de los niños, las niñas y los adolescentes vivían en condiciones de pobreza, ya sea moderada o extrema. Esto implica que en la región, la pobreza infantil total afecta a 70,5 millones de personas menores de 18 años. Por su parte, el 16,3% de los niños, las niñas y los adolescentes se encontraban en situación de pobreza extrema. Es decir que uno de cada seis niños es extremadamente pobre y este flagelo afecta a más de 28,3 millones de niños, niñas y adolescentes. Estos niños se ven afectados por una o más privaciones severas en cuanto a precariedad de los materiales de la vivienda y hacinamiento, falta de acceso a agua potable o a sistemas de saneamiento en la vivienda, desnutrición global o crónica grave (o ambas), falta de acceso al sistema educativo (niños que nunca han ido a la escuela) o falta de acceso a sistemas de comunicación e información (incluida la falta de electricidad en la vivienda). (P.100).

Vivir en la pobreza no consiste únicamente en no contar con los ingresos necesarios para cubrir las necesidades básicas, sino que es también padecer la exclusión social, que impide una participación plena en la sociedad. “En última instancia, la pobreza es la falta de titularidad de derechos, la negación de la ciudadanía”. (Bárcena, 2010, p.2).

Estas problemáticas se relacionan, la exclusión social y las acciones punibles de adolescentes; que de no darse respuestas holísticas se estabilizaran haciendo que los adolescentes y jóvenes visualicen un futuro incierto y den continuidad, seguramente a las conductas delictuales y reincidentes. Pues no se evidencia por parte del Estado según

lo afirma el comité de evaluación del SRPA un acompañamiento permanente a los adolescentes después de la sanción, que propicie, inclusión social:

El sistema también debe hacer énfasis en una atención integral de los y las adolescentes que incluya un acompañamiento en la etapa de la post sanción para prevenir la reiteración del delito. Esto es importante en la medida en que garantiza la inclusión social del adolescente en concordancia con sus derechos mediante el apoyo de programas articulados de educación, culturales, deportivos, salud, participación ciudadana entre otros, formando una concepción de ciudadanía en donde el adolescente se reconoce así mismo y a los demás como sujetos de derechos, aunado a que ello permite valorar si el Sistema cumplió su finalidad. (p. 17)

Consideramos que otro de los factores que el Estado debe proponer para generar protección social son fuentes de empleo estables para que los adolescentes al cumplir la sanción no queden desprotegidos y puedan alcanzar sus proyectos de vida; pues no se evidencia acompañamiento del estado en la post sanción según es afirmado por el informe de la comisión de evaluación del SRPA:

No se conoce tampoco qué están haciendo los jóvenes que salen del sistema penal para adolescentes, si los procesos que con ellos se trabajó en los centros o en el cumplimiento de las sanciones efectivamente cumplieron su función pedagógica y de reinserción social. Los adolescentes carecen de un acompañamiento real del Estado y de la sociedad, se pretende que ellos y ellas restauren el daño causado, pero se les deja solos a su suerte buscando trabajo para su subsistencia. Vale decir que una vez el adolescente cierra su proceso, bien por evasión o bien por que terminó en el tiempo, el rastro se pierde totalmente por la ausencia de políticas de seguimiento y acompañamiento. (p. 17)

Como se observa es una falencia bastante trascendental en la vida del joven que culmina un proceso penal y no sabe qué rumbo tomar, ya que no se han generado oportunidades para que los adolescentes vean opciones de vida diferentes a delinquir. Al no contar con este factor, *el empleo* y no cubrir las carencias por lo menos; las básicas, se disminuye la posibilidad que los adolescentes y jóvenes cumplan con uno de los objetivos del SRPA; la reinserción social, porque al no observar otras opciones estos jóvenes serán presa fácil de grupos delincuenciales y seguirán cometiendo actos punibles.

Pero también es cierto que se encuentran múltiples problemáticas en el área laboral, en cuanto a las cifras de empleo o desempleo juvenil en el mundo, según lo afirma la Organización Internacional del Trabajo OIT (2013):

La tasa mundial de desempleo juvenil, que había disminuido del 12,7 por ciento de 2009 al 12,3 por ciento en 2011, aumentó de nuevo al 12,4 por ciento en 2012, y ha seguido haciéndolo hasta el 12,6 por ciento registrado en 2013. Se trata de 1,1 puntos porcentuales por encima del nivel previo a la crisis de 2007 (11,5 por ciento). Se calcula que en 2013 hay unos 73,4 millones de jóvenes desempleados, 3,5 millones más que en 2007 y 0,8 millones más que en 2011. El desempleo juvenil creciente y la decreciente participación en la fuerza de trabajo han contribuido a la disminución de la relación mundial empleo - población juvenil a un 42,3 por ciento en 2013, frente al 44,8 por ciento de 2007. Esta disminución se debe, entre otras cosas, al aumento de la escolarización. Se calcula que en 2018, la relación mundial empleo población juvenil se situara en un 41,4 por ciento. (P. 1-2).

También para Colombia se han encontrado cifras que indican la situación actual del empleo juvenil. Fedesarrollo, (2014) Afirma:

El promedio de la tasa de desempleo juvenil en Colombia durante la última década ha estado por encima del 20%, superando la tasa promedio mundial en más de un 60%.

Asimismo que el mercado laboral colombiano en su conjunto se compara desfavorablemente con sus pares de los países de la región y del mundo. Sin embargo, el avance reciente en la disminución del desempleo juvenil en Colombia luce positivo en medio de un complejo contexto regional e internacional. La implementación de la Ley 1429 de 2010 podría explicar en buena medida la mejora relativa.

En efecto, en la actualidad los jóvenes representan alrededor del 50% de los desempleados del país, mientras que tan solo configuran aproximadamente el 30% del total de trabajadores. En este sentido, en aras de continuar con el progreso de las condiciones de los jóvenes colombianos, se requiere retomar la implementación de políticas públicas de empleo específicas para ellos. Mientras se formulan e implementan tales políticas, se debería ir avanzando en el fortalecimiento del Sistema Público de Empleo para la correcta realización de asesorías individualizadas a los jóvenes, cuya eficacia ha sido avalada por la evidencia empírica (Duell & Vogler-Ludwig, 2011).

El desempleo juvenil es una problemática que acaba con los sueños y aportes que en ésta etapa tan productiva de la vida le puede hacer a un país, y como lo afirma la OIT:

“Los costos económicos y sociales del desempleo, del desempleo de larga duración, de la falta de ánimo y de los empleos de baja calidad generalizados para los jóvenes siguen aumentando, socavando el potencial de crecimiento de las economías”.

Claramente la precarización laboral, la falta de oportunidades, la exclusión social, la injusticia e inequidad y la falta de recursos para cubrir las necesidades, crea además problemas y desmotivación en los jóvenes para trazarse proyectos de vida y trabajar para alcanzarlos, pues en muchos casos ven que sus padres y/o tutores no cuentan con la estabilidad laboral y condiciones dignas para atender sus necesidades básicas y lograr objetivos, pues parece que la vida se tornara en una “bicicleta estática”, donde se hace todos los días grandes sacrificios y esfuerzos pero no se logra mucho.

Entonces aparece otra problemática en los adolescentes; la **deserción escolar**, muchos se alejan del ámbito académico para “ayudar” en sus casas realizando las labores propias del hogar en el caso de las niñas o trabajando para contribuir en la economía de sus hogares en el caso de los niños; en el mejor de los casos, o en el peor de los casos los adolescentes no cuentan con espacios para aprovechar su tiempo libre ni trabajando ni estudiando y son conocidos como jóvenes “Nini” a los que hay que prestarles mayor atención porque están expuestos a los múltiples problemas que ofrece el entorno. Por otro lado, algunos adolescentes son obligados por sus familias a desertar de la escuela y a inducirlos en trabajos ilegales para que aporten económicamente.

Según el *Marco Pedagógico Para los Servicios de Atención dirigidos al Adolescente en conflicto con la Ley Penal 2011*

Se indica que es común encontrar que los adolescentes han desertado de la escuela por diferentes factores como la indisciplina, la exclusión, la desmotivación, los problemas de aprendizaje, los problemas familiares, entre otros, lo cual incide en bajos niveles de escolaridad y analfabetismo y en algunos casos guarda relación con la participación en grupos con conductas antisociales, bajas expectativas frente a la vida y consumo de sustancias psicoactivas. (P. 143).

A su vez se requiere una educación con nuevos retos, con contenidos prácticos que generen en el adolescente interés, y que vean a través de ella el pleno desarrollo de sus facultades cognitivas y la puesta en marcha de las mismas en la cotidianeidad.

El sistema educativo, pues, desde su compromiso con la educación inclusiva y el desarrollo de contextos saludables y el marco de la justicia curricular (Torres, 2010) tendrá que poner en marcha los medios que convengan para prevenir y tratar las conductas problemáticas. Por esto la educación inclusiva, -es decir una educación eficaz y de alta calidad para todos los niños y jóvenes constituye el mayor reto que deben enfrentar los sistemas educativos del mundo entero, ya se trate de los países en desarrollo o de los países desarrollados.

La institución escolar es la mejor garantía del derecho a la educación. Pero su adecuado funcionamiento compete tanto a la comunidad escolar como a quienes tienen responsabilidades políticas y de gestión sobre el sistema escolar. Como también la academia, desde una perspectiva crítica, para ayudar en la comprensión, explicación y aportación de criterios para contribuir a que la dinámica escolar cotidiana funcione de modo apropiada. Así los adolescentes en conflicto con la Ley son adolescentes con una experiencia educativa en términos de fracaso escolar, con expulsiones y ausencias del sistema educativo, en definitiva, excluidos de éste y seccionados de uno de los mecanismos de integración social más importantes en la sociedad (Uceda y Pérez, 2010).

El sistema educativo debe modificar muchos parámetros para incluir a los niños, niñas y adolescentes al ambiente escolar, ya que es una de las formas a largo plazo de contribuir a la sociedad para que alcance la inequidad, pero para este fin además se debe preparar a los individuos con fundamentos que se han venido perdiendo, basados en el valor que se debe dar al capital humano; el respeto, la solidaridad y responsabilidad deben ser uno de los objetivos del currículo escolar y que creen una conexión sólida con la comunidad, no solo educarlos pensando en el “éxito y dinero”, pues se tiende a pensar que las personas que no obtienen ninguna de las dos, no valen en nuestro mundo moderno, y más bien se orienten pensando en una integralidad del ser humano, no es solo enseñarles con vista a obtener bienes materiales, los cuales son importantes, pero no es la prioridad de la educación. Además que haya un vínculo de la comunidad educativa; coherencia y apoyo entre la escuela y el hogar, para reforzar los conceptos adquiridos.

Por estas y las razones que hemos mencionado se deben proponer respuestas y acciones contundentes para que la Inclusión Social, equidad, educación, estabilidad Laboral y las

condiciones de vida dignas no sea una utopía, es urgente dar respuestas claras y que impacten, para que haya Protección Social; asimismo que el acompañamiento del Estado a las familias sea permanente, ya que en los núcleos familiares se ven fracturados los derechos de los menores, y es allí donde la estructuración de la personalidad a través de hechos saludables comienza. Al tener de referente los aspectos de la protección social e implementarlos en la familia a través de políticas estables para evitar la pobreza y la exclusión social, se hará prevención integral de las conductas delictivas, porque al tener las carencias satisfechas, los miembros de la familia se dedicaran a lograr los proyectos de vida y no solo se dedicaran a sobrevivir en una sociedad tal hostil como en la que vivimos.

CAPITULO II

Título 2. Análisis de la Reincidencia Delincuencial en adolescentes de Cundinamarca.

2.1 Reincidencia: características delictivas de los Adolescentes periodo 2011 a 2013.

El presente trabajo tomará como marco de discusión el comportamiento de la reincidencia de adolescentes infractores de la Ley penal en el periodo 2011 al 2013, en el departamento de Cundinamarca. El cual registró 821 hechos reincidentes, y muestra una tendencia promedio de aumento de 18% anual. El último año se presentó una frecuencia diaria de 0.95 hechos delictivos de manera reitera por parte de adolescentes.

Fuente: Instituto Colombiano Bienestar Familiar

Es pertinente aclarar que las cifras que aquí se presentan, sólo muestran casos registrados puesto que la información es escasa como lo indica el *Comité de Evaluación del SRPA 2011*:

El SRPA no cuenta con un Sistema de Información unificado que permita hacer un análisis cuantitativo y cualitativo de la situación de los y las adolescentes que ingresan al Sistema. Aunque existen mecanismos para medir algunos aspectos, no se ha avanzado en su articulación para poder generar una línea de base. (p. 17).

La falta de información certera dificulta conocer y analizar todos los casos que se presentan realmente, los datos con los que se trabajó son valores subestimados que sirven sólo para observar tendencias, por lo que es importante un sistema de información unificado, entre otras, para hacer seguimiento y reintegración social de los adolescentes que pasan por el sistema, a través de programas especializados.

El análisis se realizará referente a los cinco tipos penales o conductas de mayor recurrencia durante los años 2011, 2012 y 2013, lo que nos dará luces acerca de la problemática de reincidencia en conductas delictivas de adolescentes en Cundinamarca, y aunque éstas cifras, como se señaló previamente son subestimadas, de igual forma muestran tendencia a incrementar.

Fuentes: Estadísticas Reincidencia Delictiva Cundinamarca. ICBF

El tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, es el comportamiento delictivo con mayor reincidencia, en tanto que concentra el 35% con 292 casos del total de hechos reiterativos cometidos por adolescentes del periodo 2011 al 2013.

El incremento elevado de la conducta de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en adolescentes, coloca de presente la deficiencia de la acción gubernamental para efectivizar el contenido del artículo 180 de la Ley 1098, en cuanto a la norma *ibídem*, la cual dispuso un trato diferenciado en el evento que el adolescente infractor sea objeto de una sanción:

1. Ser mantenido preferentemente en su medio familiar siempre y cuando este reúna las condiciones requeridas para su desarrollo.

2. recibir información sobre el programa de atención especializada en el que se encuentre vinculado, durante las etapas previstas para el cumplimiento de la sanción.

3. recibir servicios sociales y de salud por personas con la formación profesional idónea, y continuar su proceso educativo de acuerdo con su edad y grado académico.

Esta proposición jurídica indica que el medio familiar, servicios sociales y servicio de salud son claves para provocar y reducir las probabilidades de reincidencia delictiva de adolescentes. Sin embargo, en las Alcaldías de los Municipios donde más se presenta ésta problemática no hay programas para atender la problemática, expreso y definido para las familias de los adolescentes infractores. Así también lo afirma el informe de la *Comisión de Evaluación del Sistema Responsabilidad para Adolescentes 2011*:

Cuando una persona menor de 18 años presenta consumo, se encuentra en una situación de derecho vulnerado vinculado directamente con su derecho a la salud y por lo tanto debe ser remitido a un programa de atención especializada (el consumo de sustancia psicoactivas está catalogado como enfermedad mental), tal como lo señala el artículo 60 de la ley 1098 de 2006. A la fecha, es el ICBF el que paga algunos cupos en hospitales mentales para la atención especializada de adolescentes, pero es claramente el sector de la salud quien debe asumir la oferta de estos programas especiales tanto para consumo, como para la salud mental y no lo hace. (p.16).

Tabla No 1.

DELITO	2011		2012		2013	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes	35	10	100	4	140	3
Hurto	58	4	87	7	107	3
Hurto calificado	46	6	27	3	35	7
Lesiones personales	18	0	12	2	15	0
Daño en bien ajeno	6	0	6	0	7	0
Homicidio						
Acceso carnal violento						
Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones						
Otros						

Se evidencia que la participación reincidente en el tipo penal de Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en los tres años, el 94% corresponde a hombres, mientras el 6% restante corresponde a mujeres adolescentes. La tendencia de participación de adolescentes en otros delitos se mantiene con mayor participación del género masculino.

El comportamiento de la reincidencia delictiva de adolescentes tomará el tráfico y fabricación de estupefacientes y Hurto, como los delitos de mayor recurrencia y señalando un número de municipios con mayor criticidad en el departamento de Cundinamarca.

Para ampliar mas acerca del tema de reincidencia de delitos relacionados con el tráfico y fabricación de estupefacientes, resulta plausible que el informe de la comisión de evaluación facilitado por el ICBF, logró demostrar que el 90% de menores infractores presentan problemas de adicción de consumo de sustancias psicoactivas, por consiguiente se puede advertir que en tanto no se logre priorizar la salud de adolescentes a través de programas especializados y de acciones determinadas, la reincidencia de este adolescente aumentará la probabilidad de recurrencia.

Adicional a éste contexto se puede indicar que la patología de adolescentes en el consumo de sustancias es instrumentada por grupos delincuenciales. Por ejemplo en el Municipio de *Soacha a través de medios de comunicación se dijo que la banda delincriminal los “Llaneros y Embajadores” utilizaban a los adolescentes para la distribución de las sustancias, aprovechando que algunas eran consumidores.*

Tabla No 2: Criticidad en los reincidentes.

Delito No 1 Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes

2012						
Municipio	Hombre	Mujer	14 años	15 años	16 años	17 años
Girardot	36		2	4	22	8
Soacha	25	1		6	10	10
Facatativá	8		1	1	2	3
Madrid	5	1	1	1	1	3
Mosquera	4		1	1	2	

Otros	22	2				1
2013						
Girardot	82		8	13	28	33
Soacha	23	1	1	1	12	10
Fusagasugá	11		1	5	1	4
Facatativá	5			1	1	3
Zipaquirá	7			2	1	3
Otro	12	2				

Para el periodo 2012- 2013, Girardot y Soacha, corresponde a los municipios de mayor criticidad de reincidencia delictiva por parte de la población adolescente, es decir, en el año 2012, Soacha y Girardot concentraron el 61% de la reincidencia, seguido se encuentra Facatativá y Mosquera. Mientras que para el año 2013, el 73% de los hechos delictivos reiterados corresponde a los primeros municipios, lo que significa una focalización del fenómeno de la reincidencia delictiva de adolescentes.

Cincuenta y nueve (59) de los ciento tres (103) casos de reincidencia en el delito Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, durante el 2012, fueron cometidos por adolescentes entre los 16 a 17 años de edad, rango que para el siguiente año (2013) se elevó hasta 65% de reincidencia respecto al año anterior. Es necesario advertir que en los adolescentes entre las edades (14 y 15 años) la reincidencia, presenta un comportamiento no tan crítico, es decir, la ocurrencia del fenómeno correspondería a un 25% pero se infiere que es porque a partir de esta edad comienzan a incluirse dentro del sistema de Responsabilidad Penal.

Hurto

2012						
Municipio	Hombre	Mujer	14 años	15 años	16 años	17 años
Zipaquirá	20	1	4	4	10	3
Soacha	12	1	2	3	3	5
Girardot	11		1	1	5	4
Facatativá	7	2		2	4	3
Fusagasugá	6				4	2

Otros	26	3				
2013						
Zipaquirá	25	1	3	6	7	10
Soacha	21	1	2	6	5	9
Girardot	16			2	3	11
Faca	15		2	3	4	6
Ubaté	6			1	5	
Otros	24	1				

Contrario a lo que sucede del fenómeno de reincidencia del tráfico de estupefacientes, zipaquirá es el municipio con mayor afectación a los comportamientos delictivos de hurtos reiterados por adolescentes tanto en el año 2012 como en el año 2013. sin embargo, Soacha y Girardot concentran la atención con índices muy elevados.

Se presenta aumento de la reincidencia en la población de adolescentes del 164% en el año 2013, respecto al año anterior. Se observa que los adolescentes en el ultimo año con mayor reincidencia son los de edades entre 16-17 años, y se infiere que sus conductas delictivas estan pasando a niveles mas estructurados, es decir son más experimentados en sus acciones y son utilizados para cometer delitos de mayor peligrosidad en bandas delincuenciales donde encuentran mayor jerarquía.

También se muestra que aunque los hechos delictivos son mas recurrentes en los adolescentes (varones) las adolescentes se vinculan cada vez más a los hechos punibles, especialmente en hurto.

Así mismo se puede decir que los adolescentes de 17 años reincidentesde conductas delictivas al cumplir su mayoría de edad, el sistema de Responsabilidad ya no les hace seguimiento por lo que se infiereque continuan delinquiendo, al no contar con programas especializados. Pues no se evidencia la accion integral del Estado para atender estas problemáticas a traves de politicas y programas de prevencion de la delincuencia y reincidencia, tal como lo señala *La comision de Evaluacion del SRPA de 2011*:

“No se conoce tampoco qué están haciendo los jóvenes que salen del sistema penal para adolescentes, si los procesos que con ellos se trabajó en los

centros o en el cumplimiento de las sanciones efectivamente cumplieron su función pedagógica y de reinserción social”.(17).

2.2 Respuestas y fallas del Sistema Responsabilidad Penal para atender la reincidencia de adolescentes.

El presente escrito ha señalado el comportamiento reincidente de adolescentes en la comisión de conductas delictivas, con una tendencia preocupante, al registrarse cada 24 horas una reincidencia a la Ley penal. Ello, demanda una revisión a la capacidad estatal para responder al fenómeno que centra la discusión.

Por eso daremos un vistazo a las respuestas generadas por parte del Estado Colombiano para la prevención e intervención de las conductas delictivas de adolescentes en conflicto con la ley, ya que organismos internacionales como las Naciones Unidas, a través de las (Directrices Riad) (1990)y (Reglas de Beijing) (1985), buscan promover un sistema de justicia para los menores en problemas con la ley, respetuoso de los derechos y garantías procesales básicos en los Estados.

Asimismo observaremos los aspectos críticos identificados en la aplicación del Sistema Responsabilidad Penal Adolescentes a la luz del documento *Informe de la Comisión de Evaluación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes* de 2011.

Una de las entidades que integra la comisiones el **Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien ha participado y apoyado los siguientes programas:**

- El ICBF Participó en la elaboración del Consejo Nacional de Política Económica y Social (**Conpes 3629 dic 2009**): “Este documento presenta a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, la política pública para el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, SRPA, con el fin de garantizar una adecuada atención del adolescente en conflicto con la Ley y cuyo marco temporal va desde el 2010 al 2013”. Documento Conpes (p.2).

-Apoya técnicamente en el logro de objetivos a las instituciones como: **Ministerio de Justicia** el cual dentro de su matriz de acción incluyó temas como: Diseñar una campaña de

sensibilización de cultura de la legalidad para prevenir la vinculación del adolescente con el SRPA.

-M.E.N (Ministerio Educación Nacional): Brindar asistencia técnica a las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas para que realicen diagnóstico y caracterización educativa de los adolescentes vinculados al SRPA, en coordinación con el SENA e ICBF.

-ICBF/DNP: Publicar y difundir guías para Alcaldes (Ajustada)

-El ICBF: Participa actualmente en la elaboración del CONPES de prevención de la delincuencia apoyando al Ministerio de Justicia y DNP, el cual desde el ICBF, toca directamente la prevención de la reincidencia secundaria y terciaria.

Otra de las entidades que hace parte del SRPA es la **Policía Nacional (Infancia y Adolescencia)** la cual en éste momento lidera un programa de prevención de la delincuencia juvenil “ABRE TUS OJOS” y cuyos objetivos son:

-Identificar factores originadores y causas facilitadoras de las situaciones de vulnerabilidad y riesgo.

-Desarrollar Investigación Criminal cuando los niños, niñas y adolescentes sean víctimas o victimarios de conductas punibles.

-Desplegar acciones preventivas de acuerdo a lo establecido en el programa «ABRE TUS OJOS».

Como vemos las entidades están dando respuestas, trabajando en la prevención de las acciones delincuenciales en niños niñas y adolescentes, pero en éste momento las acciones tienen que ser contundentes para prevenir la comisión de nuevas conductas punibles, pues se observa que la Ley 1098 “no se acompañó de apropiación de recursos para la implementación del SRPA, además no fue enfático en delegar funciones a las diferentes entidades para que tomaran acciones y compromisos que conllevaran a la intervención efectiva y posterior reducción de estas conductas en los adolescentes entre 14-18 años”.

Fallas del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

El Informe de la Comisión de Evaluación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (2011), encuentra vacíos en la puesta en marcha del SRPA, en el que nos basaremos para argumentar nuestros planteamientos.

El proceso y las medidas del SRPA tienen “un carácter pedagógico, específico y diferenciado con respecto del sistema de adultos conforme a la protección integral. El proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño”.

Pero siete años después de la implementación, el SRPA ha presentado fallas estructurales en sus políticas y programas que dejan ver obstáculos para el cumplimiento, la protección e inserción de los adolescentes en la sociedad. Entre los problemas que ha presentado el sistema son:

a). Inconsistencias que obedecen en algunos casos a vacíos legales, en otros a problemas de interpretación discrecional de las leyes y en otros a la carencia de programas de capacitación especializada para todas y todos los funcionarios que en el proceso intervienen, así como a la bajísima oferta institucional en la que puedan ser cumplidas las sanciones no privativas de libertad en todos los municipios del país. A su vez, la carencia de espacios físicos en cada municipio a donde puedan ser conducidos los adolescentes aprehendidos en flagrancia y la poca presencia de lugares para surtir la detención preventiva así como la insuficiencia de cupos para la sanción de privación de libertad. (p.5)

b). Así como la ausencia de un Ente Rector que se encargue de convocar, coordinar y articular el sistema.

Un problema recurrente en la aplicación del sistema es que existe el imaginario que la sanción que se debe aplicar es la privación de la libertad, y se afirma que no está funcionando el sistema por falta de cupos y centros de reclusión.

Otra de las fallas es que los funcionarios no están capacitados para atender este tipo de población, no están especializados en derechos de niños, ni en justicia restaurativa,

haciendo más difícil el cumplimiento de los procesos; asimismo hay una evidente falta de cooperación, articulación y coordinación entre los operadores del Sistema Penal, y por ello la escasez de programas para la intervención de los adolescentes en conflicto con ley como la afirma el comité de evaluación SRPA:

- c). Son bajísimos los programas con que se cuenta en cada municipio para que los jueces puedan ordenar sanciones que verdaderamente cumplan la finalidad pedagógica, específica y diferenciada que deben informar tanto el proceso como las sanciones en el SRPA y con las que se asegure la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño, tales como reglas de conducta, libertad vigilada y trabajo con la comunidad. La ley no dijo quién debe asumir la financiación de estos programas y por ello el municipio cree que es responsabilidad del ICBF y el ICBF sostiene que es una tarea de los Alcaldes y no se resuelve el problema, no solo por el vacío legal que no definió quien asume dichos costos, sino porque tampoco están regladas por lineamientos técnicos la forma como deben ser ofertadas y aplicadas estas sanciones.

Todos se “lanzan” las responsabilidades como si fuera una pelota rebotadora y no se han definido específicamente los roles para que se cumplan los objetivos pedagógicos y de Justicia Restaurativa siendo los más perjudicados los adolescentes porque no reciben ninguna sanción pero tampoco hay una posible restauración a través de programas que puedan ayudarle a ver otras opciones de vida que no sea delinquir, asimismo si se toman acciones responsablemente e interinstitucionalmente se genera cohesión con las entidades logrando en los adolescentes respeto y credibilidad hacia las mismas para que el trabajo tenga impacto en la vida de estos jóvenes.

- d). Asimismo se reitera que lo más grave de este vacío se ha visto reflejado en la limitación de la oferta de programas donde puedan ser cumplidas las sanciones impuestas por los jueces (hay oferta en algunos municipios, pero en otros se carece completamente de programas). La Ley prevé 6 sanciones incluida la privación de libertad y en la actualidad la poca oferta que existe está limitada a centros de internamiento, pero no existen programas en los

municipios a donde puedan ser asignados los adolescentes que cometen delitos, particularmente la libertad vigilada y el trabajo con la comunidad como dos grandes bastiones para lograr la finalidad de la justicia restaurativa. (p.10).

La falta de garantías para el cumplimiento de las medidas conlleva a que haya injusticia y no se logre la reintegración o inclusión social de los adolescentes, ya que no están recibiendo las medidas integrales para que haya sanción y a su vez restauración en la vida de ese joven, generando nuevas y peores consecuencias, porque al notar que no existen acciones para reprimir estas conductas, se incrementan los hechos delictivos y la frecuencia con que las realizan, adquiriendo más “estatus” en el medio delincencial. Tampoco hay responsabilidad, y reparación del daño que han causado, por lo que habrá desvinculación e indolencia hacia los demás miembros de la comunidad.

e). Otra de las fallas no menos graves es la falta de asignación de recursos: El Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional no han asignado partidas presupuestales, ni hay marco legal que defina en cabeza de quien quedan centradas esas responsabilidades para ofrecer los programas en los que se cumplan las sanciones impuestas por los jueces, justamente para superar lo que pasa en la actualidad y es que el municipio espera a que el departamento lo haga y el departamento espera a que el ICBF lo aporte.

f). Para reiterar lo anterior, la falta de claridad frente a la financiación del sistema ha generado una débil institucionalidad que contribuye a desnaturalización de la finalidad del sistema. La Comisión de Seguimiento ha identificado que en la actualidad la ausencia de recursos orientados a la implementación y fortalecimiento del sistema contribuye a que no existan espacios adecuados para llevar a los y las adolescentes; insuficiencia de cupos (todas las sanciones) para el cumplimiento de las sanciones definidas en la ley; ausencia de programas especializados y de lineamientos técnicos para cada sanción. Adicionalmente, el sistema evidencia un alto número de

procesos represados lo que afecta también la finalidad pedagógica del sistema, como se verá más adelante. (p.10)

Es realmente preocupante la falta de programas que atiendan estos vacíos simplemente por no definir quién asigne el presupuesto o de quien es la responsabilidad, lo peor es que a partir de toda esta desorganización estructural se genera una desorganización social, porque al no contar con los recursos suficientes no hay infraestructura pero tampoco cupos para que cumplan la sanción, y menos programas especializados y socioeducativos, para que la privación de la libertad no sea la única sanción impuesta. Se necesita una Justicia Restaurativa para que los adolescentes infractores no solo reconozcan y se responsabilicen de los daños causados sino que los reparen, pero esto debe ser con el apoyo de las redes sociales (Familia, Sociedad y Estado).

A su vez con las prácticas socio educativo y en medio abierto existe la posibilidad que el joven tome conciencia y asimile un estilo de vida diferente al de delincuencia. En la actualidad no se está presentando esta reparación ni restauración ya que por la falta de programas especializados, otra de las opciones es entregar a los padres, a un adolescente infractor firmando un compromiso de “no delinquir” que nunca se cumplirá.

Lo peor es que al no haber organización en las entidades partícipes del sistema y si no se financian programas especializados, tampoco se aplican las sanciones integralmente, dejando a su suerte a los infractores; los cuales darán continuidad a los delitos generando en la sociedad una percepción de impunidad; pues se asegura que a los adolescentes no les pasa nada al cometer hechos punibles y hay rechazo y exclusión de la sociedad hacia ellos.

Pero adicionalmente se está presentando otro problema no menos grave, y es que al no implementarse las sanciones ni generar justicia Restaurativa; los adultos están tomando partido de esta situación manipulando, utilizando y vinculando a los adolescentes a bandas delincuenciales para cometer todo tipo de delitos, pues saben que no serán judicializados ni ellos ni los adolescentes, ampliando con esto la oferta y reiteración de delitos por esta población

Es decir, el sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes; requiere una reestructuración, participación, coordinación y asignación de los recursos necesarios

(económicos y humanos) que evalúen y reconozcan las debilidades que ya se han expuesto, y que tomen medidas necesarias para atender a los adolescentes infractores de la ley pero que a su vez prevenga la reincidencia y vinculen a los adolescentes a la sociedad, a partir de programas especializados, vinculando a la comunidad, familia, sociedad y Estado.

Para concluir este apartado reiteramos que el sistema de Responsabilidad Penal Adolescente en Colombia presenta aspectos críticos en su aplicación, que una de las sanciones que en última instancia se debería interponer a los adolescentes infractores de la ley es la privación de la libertad, pero desafortunadamente a raíz de todas las fallas del sistema, es la que más se utiliza, no logrando los objetivos del sistema, que finalmente son que haya una Justicia Restaurativa; pues sus acciones son de “carácter pedagógico” y deben inducir la reintegración de los adolescentes a la sociedad a través de programas que causen impacto en sus vidas.

De igual forma se debe definir un Ente Rector que se encargue de convocar, articular y coordinar el sistema, también es trascendental la asignación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional. Al observar tantos déficits del sistema y los actos delictivos en aumento notamos que si no se toman medidas, las problemáticas incrementarían sus índices y los adolescentes no encontrarían alternativas diferentes a la continuidad de la delincuencia, pues no son solo responsables penalmente sino que también son sujetos de protección constitucional, por lo que urge prácticas socioeducativas y lograr Justicia Restaurativa.

2.3 Políticas de intervención

Como se expondrá detalladamente se necesitan acciones a través de programas especializados que intervengan y prevengan conductas delictivas. Es preocupante que no se haya previsto muchas de las falencias antes de la puesta en marcha del SRPA; pues no se dice que no se presenten dificultades en los nuevos procesos, pero también se deben prever las alternativas de solución para las mismas, los conocidos “plan b”, no solo se trata de la vida, presente y futuro de los adolescentes sino de sus familias y la sociedad.

Es así como se mencionaran las fallas en las políticas de intervención para contrarrestar la delincuencia y reincidencia de nuestro sistema. A su vez tendremos en cuenta

planteamientos para lograr la tan anhelada Justicia Restaurativa, en la que se involucra no solo al ofensor sino a las víctimas y la sociedad; pues las prácticas que proponen no solo se pretenden reparar el daño, sino ayudar al adolescente a reestructurar sus acciones negativas y reintegrarlo en la sociedad, realizando acciones no remuneradas en beneficio de la colectividad.

Comenzaremos con las falencias que halló la comisión de evaluación de SRPA, el cual afirma:

La Comisión ha identificado la ausencia de una política de prevención de delincuencia infantil y adolescente de conformidad con la Ley 1453 que prevé justamente su adopción por parte del Ministerio de Justicia.

El Estado debe elaborar y aplicar una política general de justicia de menores de edad que abarque la prevención de la delincuencia juvenil. La experiencia internacional muestra que una política de justicia de menores que no vaya acompañada de un conjunto de medidas destinadas a prevenir la delincuencia juvenil tiene graves limitaciones. Se deben promover políticas sociales complementarias a las de seguridad, orientadas a proteger a los niños, niñas y adolescentes del abuso de sustancias psicoactivas y el control del tráfico de armas ligeras y corto punzantes. (p.18)

No se está logrando que el adolescente restablezca los vínculos con la comunidad ni que haya resarcimiento del daño causado. Por tanto el objeto del Sistema Responsabilidad Penal en Colombia no se ha logrado, para la intervención se deben adoptar pautas que involucren a los factores mencionados (Adolescentes, familia y sociedad), para que se cumplan las 3R de la justicia restaurativa: Responsabilidad, Reparación y restauración. También se sabe que otra de las motivaciones del SRPA era proteger a los niños niñas y adolescentes de la vinculación a bandas criminales, pero sin políticas de prevención este objetivo tampoco se ha logrado.

Asimismo es importante también aunar esfuerzos para diseñar e implementar proyectos especializados y que la finalidad protectora, pedagógica y reparadora del SRPA se cumpla como lo afirma el estudio *La prestación de servicios a la comunidad: Una sanción con oportunidades para desarrollar procesos de Justicia Restaurativa en el Sistema colombiano de Responsabilidad Penal para Adolescentes 2012*, en el que se define la Justicia Restaurativa como:

Un nuevo modelo de justicia basado en la comunidad Más que una alternativa al sistema de justicia penal, la justicia restaurativa ha sido asumida, en buena parte de las legislaciones y sistemas penales para adolescentes de los países de América latina, como un complemento del sistema de justicia penal que se materializa en la aplicación de sus principios y en el desarrollo de programas para favorecer las 3R que transversa su enfoque: la *responsabilidad* del ofensor, la *reparación* a la víctima o *restauración* a la comunidad y la *reintegración* social del ofensor, además de la disminución de la reincidencia, la celeridad en los procesos de administración de justicia y los beneficios colectivos que se le atribuyen en términos de la recomposición del tejido social. (P.13).

En términos generales, la justicia restaurativa se define como un nuevo movimiento en el campo de la victimología y la criminología que reconoce que el delito causa daños a las personas y a las comunidades e insiste en que la justicia debe reparar esos daños y permitir a los afectados participar en los procesos .

En nuestra investigación se pudo evidenciar que las conductas reincidentes vienen en aumento por tanto se infiere que las redes, familiares, sociales, educativas y Estatales están presentando fallas, es necesario que las prácticas holísticas para brindar protección, acompañamiento y reintegración o inclusión social, se creen oportunamente ,además porque se debe satisfacer las necesidades de las partes involucradas con el propósito de reparar los daños, también porque los infractores al cumplir sus sanciones en medios abiertos dimensionan las causas de sus delitos, y tienen la posibilidad de dar respuestas responsabilizadoras y reparadoras que cuando se implementan las medidas privativas de la libertad, ya que ésta última solo se centra en el ofensor como infractor; sin tener en cuenta a las otras partes, como lo afirma el estudio en mención:

Por consiguiente, los programas buscan habilitar a la víctima, al ofensor y a los miembros de la comunidad –partes interesadas primarias y secundarias– para que estén directamente involucrados en dar una respuesta al delito, con el apoyo de profesionales del sistema de administración de justicia que operan como garantes y facilitadores de un proceso cuyo objetivo principal es la reparación de los daños mediante acuerdos que puede incluir respuestas de diversa naturaleza: reparación, restitución, garantía de no repetición, conciliación, servicio a la comunidad, entre otras. En suma, la justicia restaurativa conlleva la responsabilidad del ofensor y la reparación material o simbólica a la víctima tanto como de la comunidad, cuyo concurso debe aportar a la transformación de las bases culturales y estructurales del delito.

Algunos de los procesos restaurativos necesarios para el cumplimiento de la justicia restaurativa en los adolescentes infractores para reparar el daño, a la víctima y la comunidad nos lo presentan la *Revista Infancia Juventud y Ley 2014* (p.31).

a).Procesos con participación de la víctima:

Es directa cuando hay un encuentro cara a cara entre el adolescente infractor y la víctima; En caso que se opte por un encuentro cara a cara, se podrá utilizar:

.Mediación donde participa el adolescente, un adulto responsable del adolescente y la víctima;

.Reunión Familiar donde participa el adolescente, un adulto responsable del adolescente y persona de apoyo, y la víctima, familia y persona de apoyo;

. Reunión Restaurativa donde además de los participantes del parágrafo anterior, pueden participar miembros de la comunidad y operadores de justicia, sin ejercer su rol.

Es indirecta cuando la víctima no desea participar cara a cara con el adolescente; en estos casos se puede designar un representante de la víctima o simplemente el facilitador hace referencia de la voluntad de la víctima en los procesos restaurativos.

b). Procesos sin participación de la víctima:

Se pueden realizar reuniones familiares y reuniones restaurativas únicamente con el adolescente y su adulto responsable. La forma de reparar el daño.

Podrá comprender acciones en beneficio de otras víctimas o de la comunidad (acciones comunitarias o prestaciones de servicio a la comunidad).

c). La Mediación:

Mediación Directa: Aquella utilizada para reparar el daño mediante el encuentro “cara a cara” entre el adolescente infractor y la víctima, ayudados por un tercero llamado mediador.

Mediación indirecta: Es aquella utilizada para reparar el daño sin que necesariamente se lleve a cabo el encuentro entre las partes (infractor o víctima), también con participación del mediador.

Esta se da en las situaciones en que la víctima no desea tener un encuentro con el adolescente, ya sea por temor, grado de victimización o desinterés, y que una vez informada del propósito o intención del adolescente acepta que se le repare de algún modo el daño.

d). Reuniones familiares:

Las reuniones familiares son reuniones estructuradas que favorecen el encuentro y diálogo entre la víctima y el adolescente infractor, pero donde pueden además participar familiares y personas de apoyo de ambas partes. Estas reuniones son conducidas por personas imparciales (el facilitador y cofacilitador), quienes ayudarán en el proceso de diálogo para encontrar formas adecuadas de reparar el daño.

e). Las Reuniones Restaurativas:

Las reuniones restaurativas son reuniones estructuradas que favorecen el encuentro y diálogo entre la víctima y el adolescente infractor, donde pueden participar familiares y personas de apoyo de ambas partes, y también miembros de la comunidad e incluso operadores de justicia, pero sin asumir dicho rol. Generalmente se usa este proceso restaurativo cuando la comunidad ha sido afectada por la infracción del o de los adolescentes involucrados. Estas reuniones son conducidas por personas imparciales (el facilitador y cofacilitador), quienes ayudarán en el proceso de diálogo para encontrar formas adecuadas de reparar el daño.

f). Acciones en Beneficio de la Comunidad:

Herramienta transformadora que consiste en el servicio solidario protagonizado por los adolescentes, destinado a cubrir necesidades reales y sentidas de una comunidad, planificado intencionadamente en función de los aprendizajes que se quieren obtener.

Esta herramienta de trabajo viene siendo utilizada como una forma adecuada para trabajar la reparación del daño por parte de aquellos adolescentes que muestren voluntad para reparar sin llegar a sostener el encuentro o cuando la víctima no ha sido ubicada ni contactada.

En los procesos de reparación del daño deben tenerse en cuenta dos dimensiones:

Interna: Pues a través de ella el adolescente va tener una reconciliación consigo mismo al sentir que lo que hace puede transformar positivamente su entorno.

Externa: pues va a sentir que tendrá una reconciliación con la comunidad y crea nuevos lazos de unión.

Cabe resaltar que son pocos los países de Latino América que han implementado prácticas socio-educativas en comunidad y se resalta, en este sentido, que Colombia fue uno de los países de América latina que más tardó en incorporar los principios del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y prácticamente no ha desarrollado experiencias en justicia juvenil restaurativa.

En algunos países como Perú, Chile, el Salvador, Brasil y paradójicamente en Agua Blanca, Cali-Colombia se implementó prácticas socioeducativas en medio abierto; teniendo como características la vinculación de la ciudadanía, la resolución de conflictos, la convivencia escolar, la inclusión social; logrando reparar los daños a las víctimas y restablecer los vínculos del adolescente con su comunidad.

Especialmente en Agua Blanca, Cali; hubo inclusión social a través del trabajo con adolescentes en conflicto con la ley no judicializados, fue un proyecto de investigación

entre 2000y 2005, en el que un grupo de profesionales se dio la tarea de pensar un modelo de justicia restaurativa para Colombia. Esto fue antes de la implementación del SRPA, se abordaron pandillas juveniles en las que se implementaron, prácticas de mediación víctima ofensor y la comunidad y actividades de formación y vinculación a redes sociales, educativas, laborales, deportivas existentes en la comunidad, como mecanismo de inclusión social.

De esta forma vemos, que las prácticas orientadas a la vinculación de la sociedad entiéndase esta como la familia, comunidad, actores sociales, Estado y demás organizaciones, que aporten en la creación y puesta en marcha de políticas de intervención de la delincuencia juvenil, generan resultados trascendentales en la vida del ofensor , sus víctimas y la sociedad; reparando, restaurando y reintegrando a los adolescentes a través de acciones que los comprometa y les evidencia el daño que han podido causar, pero a su vez que tomen conciencia, que a través de sus actos pueden destruir o construir.

Se puede observar con el ejemplo del caso de países de América Latina y de Agua blanca en Cali-, que sí se pueden diseñar e implementar programas socioeducativos, y son los que mejores resultados han generado, que la privación de la libertad que desafortunadamente es la medida que se implementa de manera reiterativa, pero falta planeación, coordinación interinstitucional, interés Estatal, y otros factores que evidentemente no están abordando las conductas delictivas ni previniéndolas, apartando a los adolescentes de la oportunidad de restablecer su vida en el ámbito legal y de incluirlos a la sociedad que cada vez los estigmatiza más, a través de la educación, deporte y buenas prácticas saludables.

Discusión:

Al concluir el trabajo de investigación se precisa que la Familia, Estado y Sociedad son factores protectores fundamentales para preservar los derechos de niñas, niños y adolescentes, los que en una familia, donde se les respete, valore y tengan como referentes modelos positivos, estructurarán una personalidad sólida basada en valores, y construirán proyectos de vida. A los que el Estado debe proveer tanto a ellos como a sus familias elementos necesarios para preservar la calidad de vida y proteger su salud física y mental y a los que la sociedad, no desvincule por sus condiciones económicas y estigmatice por sus condiciones legales.

Por esto al presentarse falencias en estas redes sociales, los niños, niñas y adolescentes sufren fracturas emocionales que los marca negativamente, pues si han sido víctimas de maltrato serán maltratadores en potencia, si han sido víctimas de abusos, podrán replicar esta y todas las conductas de las que hayan sido objeto. Entonces se evidencian las fallas no solo de los factores protectores ya mencionados, sino de un Sistema de Responsabilidad Penal endeble, a través de las conductas reincidentes de los adolescentes, en éste caso los de Cundinamarca, ya que de acuerdo a la información que se obtuvo, se evidencia una tendencia promedio de aumento de 18% anual. Siendo el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y el hurto el comportamiento delictivo con mayor reincidencia.

Se infiere que detrás del tráfico, fabricación o porte de estupefacientes se encuentran bandas delincuenciales que utilizan a los adolescentes, primero para inducirlos al consumo y luego los vinculan como expendedores de sustancias psicoactivas, ya que les resulta a los adultos que se encuentran detrás de estas bandas más fácil y económico vincularlos porque no les representa peligro alguno con las autoridades y porque les pagan más barato, aprovechando las condiciones sociales del joven. También seguramente cuando los adolescentes cumplan su mayoría de edad adquieran jerarquía en estas organizaciones y las podrán liderar continuando con las acciones delictivas con más experiencia y ampliando las redes de narcomenudeo vinculando a otros adolescentes de su entorno.

En cuanto a la conducta delictiva de hurto, se relaciona también con maras o pandillismo donde los adolescentes encuentran aceptación y prestigio que no tienen en

otros ámbitos sociales, aprovechando estos espacios para delinquir y a su vez para lucrarse económicamente y sostener el consumo de sustancias psicoactivas. Se observa que el último año la reincidencia incrementó exageradamente en este delito en un 164%, cifras alarmantes y preocupantes que llaman la atención de las autoridades urgentemente, porque los adolescentes están siendo utilizado y vinculados a los diferentes delitos ya que no son judicializados ni reclusos en ninguna institución quedando libres para volver a cometer más delitos y con mayor experiencia.

Así mismo la aprehensión de cuatro mil cuatrocientos cincuenta y ocho (4.458) adolescentes en Cundinamarca durante los últimos tres años (2012-2013-2014), requiere intervenciones interinstitucionales oportunas, frente al recurrente y reincidente comportamiento delictivo de esta población, principalmente, en los tipos penales ya mencionados y otros.

También es pertinente enfatizar en la limitación de información por parte de las entidades para ampliar aspectos relevantes al momento de analizar las características delictivas de los adolescentes, así como para ampliar y consolidar el marco teórico. Hay vacíos en la información que generan dudas, y se requiere que las entidades realicen estadísticas más sólidas, pues se considera que es uno de los primeros pasos para observar la magnitud de la problemática y abordarla integralmente, como lo señala el equipo evaluador del sistema SRPA:

El SRPA no cuenta con un Sistema de Información unificado que permita hacer un análisis cuantitativo y cualitativo de la situación de los y las adolescentes que ingresan al Sistema. Aunque existen mecanismos para medir algunos aspectos, no se ha avanzado en su articulación para poder generar una línea de base.

Esta carencia de información ordenada e integrada, demanda de manera urgente la estructuración del sistema de información para que cada entidad reporte oportunamente la situación de cada adolescente que pasa por su despacho, de tal forma que una entidad central (rector) pueda sistematizarlas y analizarlas para poder observar el panorama general de la operación del sistema.

En el estudio se evidencia que algunas entidades del estado están implementando programas para la prevención de la delincuencia pero no se perciben para la prevención de la reincidencia. También se evidencia las fallas que presenta el SRPA al no atender

integralmente las conductas disruptivas en jóvenes y sus familias, dejando a la intemperie la evolución integral de adolescentes y sus núcleos familiares.

Las fallas que presenta el SRPA (ya expuestas) son muy graves pues no se evidencia intervención de las problemáticas de adolescentes integralmente, con miras a restaurar y reintegrarlos a la sociedad mostrándoles alternativas diferentes a las conductas antisociales, aumentando la crisis social en esta población dejando en el país vacíos y pérdidas del capital social para las nuevas generaciones, como lo señala el documento, *Prevención de la delincuencia juvenil: Análisis de experiencias internacionales*, (2004):

Los comportamientos antisociales de los adolescentes y los jóvenes son los que crean el mayor desconcierto en la sociedad. Éstos hacen que aumente considerablemente la percepción de la inseguridad y la estigmatización de algunos barrios. Aunque no tengan un alto costo económico, sí aumentan el miedo, cuyo costo social es muy elevado ya que puede paralizar la actividad social de una ciudad, provocar el abandono de los barrios o romper el tejido social de las comunidades. (p. 27)

No es para más, pues al no generar respuestas holísticas para las fallas del sistema y al no crearse e implementarse programas que atiendan integralmente a los jóvenes en la prevención de conductas delictivas y reincidentes, tendremos los resultados que estamos advirtiendo, fracturando la estabilidad psicológica, y económica de la sociedad. Considero que si hay interés real por parte del estado y la sociedad y se atiende las necesidades de la familias más vulnerables y tienen en cuenta la implementan de políticas y programas para esta población y se superan los eventos traumáticos, la tendencia de delincuencia y reincidencia seguramente comenzará a disminuir notablemente beneficiando no solo a estos jóvenes y sus familias sino a nuestro país, pero son acciones que se tienen que implementar eficazmente porque las conductas delictivas van en aumento.

Conclusión

La protección social se constituye como un conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colombianos especialmente de los más vulnerables para obtener como mínimo el derecho a la salud, educación y el trabajo. Es el deber ser del Estado proteger a los más vulnerables y en nuestro caso a los niños niñas y adolescentes en riesgo y promover sus derechos para que crezcan en ambientes sanos física y mentalmente.

Se debe Priorizar la atención en áreas de la salud y la educación infantil; y promover la estabilidad laboral de los adultos para que satisfagan sus necesidades básicas, también se evidencia que la pobreza infantil y el desempleo juvenil se encuentran en índices elevados. Otro factor que influye en los riesgos sociales de adolescentes son las brechas entre ricos y pobres, la injusticia social, inequidad y exclusión social.

Por otro lado al comparar las falencias del sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y los resultados obtenidos; no se evidencia intervención integral ni prevención de las conductas delictivas y reincidentes y no se está logrando el objetivo de la implementación del sistema el cual es de “carácter pedagógico” y restaurativo.

Asimismo se evidencia la falta de ofertas de programas donde puedan ser cumplidas las sanciones impuestas por los jueces, ya que la medida más implementada es la privación de la libertad, y es la última que debe aplicarse según normas internacionales, por tanto se tienen que crear programas socioeducativos y en medio abierto, donde el adolescente infractor reconozca el daño y haya resarcimiento del mismo a la víctima y a la comunidad, para que a su vez pueda ser reconocido como ser sociable e incluido en la comunidad.

Es debido a esto que se puede concluir que uno de los principales factores para prevenir la reincidencia delictiva es diagnosticar, implementar y evaluar las políticas y programas dirigidos a los adolescentes, la comunidad y sus núcleos familiares para que haya éxito, involucrando a los jóvenes en su puesta en marcha y comprometiendo a la comunidad para disminuir los factores de riesgo, además se deben crear estrategias para abordar los factores de riesgo generados por el mundo moderno, pero se debe hacer con la corresponsabilidad interinstitucional y que cada una asuma el rol que debe realizar.

Pero también podemos concluir que un factor muy importante para prevenir la delincuencia es brindar a los niños, niñas y adolescentes desde su núcleo familia, la estabilidad física y emocional a través de la protección integral de sus derechos y la satisfacción de las necesidades y carencias básicas, para que crezcan en ambientes saludables y se cree un vínculo estable con la sociedad, para que más adelante no se excluya de ésta.

Por último se debe tener en cuenta el siguiente derecho: Derecho a la Rehabilitación y la Resocialización de la Ley 1098 de 2006. Los niños, las niñas y los adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación y resocialización, mediante planes y programas garantizados por el Estado e implementados por las instituciones y organizaciones que este determine en desarrollo de las correspondientes políticas públicas.

Referencias Bibliográficas

- Colombia, Congreso de la República 2006. Ley 1098 de Infancia y Adolescencia.
- Constitución Política de Colombia 1991.
- Instituto Colombiano Bienestar Familiar, (2011).Informe de la Comisión de Evaluación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Colombia.
- Alcaldía Mayor de Bogotá y Organización Internacional para las Migraciones, (2012).La prestación de los servicios a la comunidad: *Una sanción con oportunidades para desarrollar procesos de Justicia Restaurativa en el Sistema colombiano de responsabilidad Penal para adolescentes*. Bogotá, Colombia. Recuperado de <http://www.oim.org.co>
- Procuraduría General de la Nación, (2012).*Informe de Vigilancia Superior al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes*. Bogotá, Colombia. Recuperado de <http://www.procuraduría.gov.co>
- Observatorio Internacional Justicia juvenil (2014).Revista infancia, juventud y ley. . Recuperado de <http://www.oijj.org>.
- Graña, J. y Garrido, V. (2008).*Reincidencia Delictiva en Menores Infractores de la Comunidad de Madrid: Evaluación, Características Delictivas y Modelos de Predicción*. Madrid, España. Recuperado de <http://www.es.scribd.com>
- Vergara, C. (2005).Antecedentes de la Protección Social en Colombia: *Iniciativa de Formación en Gerencia Social para la Protección Social*. Washington E.U.

- Organización Internacional Trabajo, (2013).Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil 2013: *Una generación en peligro*. Recuperado de <http://www.ilo.org/wcmsp5>.
- CEPAL, (2013) *Panorama Social de América Latina*. Recuperado <http://www.cepal.org/publicaciones/xml>
- Fedesarrollo (2014). El desempleo juvenil en Colombia. Recuperado de <http://www.fedesarrollo.org.co/wp>
- Otalvaro, B. (2012).Pobreza y exclusión: *Un reto para las Políticas Públicas de Inclusión social en Colombia*. Cali, Colombia. Recuperado de [http. //univalle.edu.co](http://univalle.edu.co)
- Rodríguez, E. (2007).Jóvenes y violencias en América Latina: *Priorizar la prevención con enfoques integrados*. Recuperado de [http. //www.umanizales.edu.co/revistacinde/index.html](http://www.umanizales.edu.co/revistacinde/index.html)
- Prevención de la delincuencia Juvenil: *Análisis de experiencias internacionales*.(2004). Chile.: DM impresos. Recuperado de <http://www.sename.clsenname/otros>